

Biocombustibles

¿Moratoria o participación?

Los impactos de los biocombustibles sobre la seguridad alimentaria mundial y la integridad de los ecosistemas no se pueden evaluar a partir de la idea de que la producción de energía avanzará fatalmente sobre áreas de producción alimentaria o reservas ambientales no explotadas anteriormente. Este tipo de juicio no tiene en cuenta tres elementos básicos.

En primer lugar, la productividad crece y muchas veces lo hace a un ritmo superior que el de la propia demanda. Actualmente, en Brasil por ejemplo, existen 170 mil millones de hectáreas plantadas de pasturas, con un promedio de una cabeza de ganado por hectárea. El potencial de liberar áreas, a través del aumento del número de animales en estas pasturas, es extraordinario. En 1975, en el Estado de São Paulo se producían 10 litros de alcohol por hectárea cultivada con caña de azúcar, mientras que hoy llegan a 70 litros.

En segundo lugar, no existe solamente competencia, sino también complementariedad entre producción de alimentos y energía. La soya brasileña usada para la producción de biodiésel corresponde

solamente al 18% de un producto cuya mayor parte se destina a harinas para alimentación animal. De la misma forma, ingenieros agrónomos de la State University de Iowa muestran que el balance energético negativo del etanol norteamericano de maíz podría mejorarse considerablemente si se pasara a usar la materia seca en la alimentación del ganado.

Lo más importante, sin embargo (el tercer elemento que la condena sumaria de los biocombustibles subestima), es que estos nuevos mercados de energía no podrán afirmarse internacionalmente mientras no estén acompañados por una rigurosa trazabilidad socioambiental y por un sistema de certificación reconocido.

No obstante, esto no quiere decir que los biocombustibles no conlleven riesgos para las sociedades que los producen (incluso, amenazas globales). En el caso brasileño, nada indica que el etanol represente una amenaza directa a la selva amazónica, pero los 17 mil millones de dólares en inversiones que se han realizado en los últimos dos años, han sido para plantas ubicadas en su gran mayoría en el cerrado (sabana), un bioma poco protegido y de



Foto: Universidad de São Paulo

Por Ricardo Abramovay


Profesor titular de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de São Paulo, Brasil y coordinador de su Núcleo de Economía Socioambiental (NESA).

gran importancia en el centro-oeste del país. Además, las gigantescas superficies de cultivo continuo de caña de azúcar empobrecen la diversidad de los paisajes rurales, a pesar de los efectos multiplicadores positivos de los innegables avances técnicos en la plantación de caña y en su industrialización.

En el caso del biodiésel, el programa gubernamental dirigido a productos como el tártago (aceite de ricino) y el aceite de palma –cultivados principalmente por sectores menos adinerados de la agricultura familiar– no ha sido capaz, durante su primer año de existencia, de evitar que la oferta de materia prima, se concentrara casi exclusivamente en la soya y, por consiguiente, en agricultores de mayor tamaño. Claro que esto no condena el programa, pero muestra cuán difícil es organizar mercados dirigidos a la participación de los más pobres.

En términos globales, es verdad que la reciente elevación de los precios agrícolas mundiales se puede atribuir, fundamentalmente, al aumento del ingreso y a los cambios en los patrones de consumo de los países emergentes. En 1975, un chino consumía un promedio de 20 kg de carne por año y hoy en día

ha pasado a 50 kg anuales. Incluso así, el uso del maíz para la producción de etanol en EE.UU. ha fortalecido, con toda seguridad, esta tendencia a la elevación de los precios agrícolas. Pero es importante subrayar que no son los biocombustibles en general los que ejercen esta presión, y sí el etanol norteamericano de maíz. No hay evidencia de que el etanol brasileño de caña de azúcar acarree un impacto semejante sobre los precios agrícolas.

La gran novedad en estos mercados está en la participación de un amplio conjunto de grupos de interés (stakeholders) en su organización. Importantes grupos como WWF, Amigos de la Tierra, The Nature Conservancy, entre otros, se acreditan como interlocutores legítimos con un rol decisivo en la certificación de los biocombustibles. Su capacidad de interferir en los mercados y en los procesos productivos no se da de antemano. Pero todo indica que la imposición de criterios socioambientales para la certificación de la bioenergía es un camino más interesante para las organizaciones sociales que la reivindicación genérica de una moratoria en relación con el tema 

Los nuevos mercados de energía no podrán afirmarse internacionalmente mientras no estén acompañados por una rigurosa trazabilidad socioambiental y por un sistema de certificación reconocido.